

SEPIA XI

Peru : el problema agrario en debate
Trujillo, 16 al 19 de agosto 2005

Tema II: “Globalización, Agricultura Y Desarrollo Rural”

**LOS EFECTOS DE LA LIBERALIZACION SOBRE EL
EMPLEO RURAL**

Pascale Phélinas

COMUNICACIÓN AL COLOQUIO SEPIA XI

Del 16 al 19 de agosto de 2005, Trujillo, Perú

LOS EFECTOS DE LA LIBERALIZACIÓN SOBRE EL EMPLEO RURAL

Pascale Phélinas

1. INTRODUCCIÓN

Las últimas décadas han sido un período de cambio considerable a nivel global. Como en muchos países, el contexto económico peruano ha sido caracterizado por la liberalización de la economía, la apertura comercial, la privatización de las empresas públicas, y la retirada acentuada del Estado hacia la economía que se manifestó por la reducción de los gastos públicos, la desregulación de los mercados, y el retiro político en las medidas de redistribución. Este contexto de liberalización y de apertura económica, comercial, y financiera preocupa mucho por sus repercusiones en la capacidad del país para crear nuevas fuentes de ingresos y de empleo en respuesta a las oportunidades y retos que lleva el nuevo contexto internacional. En el Perú, el escaso crecimiento del empleo en la industria "moderna" colocó una pesada carga sobre la agricultura (y eventualmente sobre el sector de los servicios) para crear empleos a un ritmo igual al de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo.

La cuestión del empleo en el medio rural se asoció mucho tiempo, en la literatura, a la propensión limitada del sector agrícola al emplear la mano de obra disponible. Esta baja capacidad de absorción se imputó a numerosos factores: la pobreza de los recursos naturales, el rigor del clima, la escasez de agua, los pocos recursos disponibles para financiar la inversión y las dificultades de acceso al crédito por agricultores cuya formación técnica y en aspectos de gestión es casi inexistente. A esto se unen los altos costos de comercialización debido a la falta de medios de comunicación, a las distancias, al estado de las carreteras, y por lo tanto a la escasa circulación de la información sobre los precios y sus tendencias, que no facilitan la comercialización de los productos agrícolas. En consecuencia, la demanda que emana de las ciudades tiene dificultades para inducir un aumento de la oferta rural de productos agrícolas que podría mejorar el empleo y los ingresos agrícolas.

Frente a la incapacidad del sector agrícola para garantizar un empleo a tiempo completo a las poblaciones rurales, la atención se ha dirigido recientemente hacia las actividades que desarrollan las unidades agropecuarias con el fin de diversificar sus fuentes de ingresos¹. Muchos estudios recientes sobre América Latina destacan las repercusiones de estas actividades sobre la absorción de la mano de obra en empleos (más o menos) productivos, la disminución del éxodo rural, la mejora de la distribución de los ingresos, y la reducción de la pobreza (Lanjouw, 1999; de Elbers y Lanjouw, 2001; de Ferreira y Lanjouw, 2001; Ruben y Van den Berg, 2001; Reardon et alii, 2001). En Perú, varios estudios destacaron la diversidad de empleos ocupados por trabajadores de explotaciones agrarias peruanas de la Sierra (Caballero, 1981; Figueroa, 1980; Gonzales de Olarte, 1994).

La presente investigación intenta evaluar en qué medida el proceso de apertura y liberalización de la economía peruana afectó el volumen y la calidad de los empleos ocupados en el medio rural. La argumentación se desarrolla en tres tiempos. Después de una breve evocación de las dificultades de

¹ Es difícil encontrar un término satisfactorio y sucinto para describir el conjunto de las actividades que desarrollan las unidades agropecuarias con el fin de diversificar sus fuentes de ingresos. El término de actividad secundaria ya se utiliza en la mayoría de las fuentes estadísticas para definir la actividad que ocupa más tiempo productivo después de la actividad principal. Además presenta el inconveniente de consolidar una visión corriente pero falsa, sabiendo que estas actividades ocupan una posición secundaria a la actividad agropecuaria y constituyen fuentes de ingresos inferiores a las de la agricultura. Retuvimos los términos de actividades, ocupaciones, y empleos alternativos.

evaluación de la situación del empleo en el medio rural con las estadísticas nacionales, se presentará de la manera más precisa posible la situación del empleo en el medio rural peruano utilizando las distintas fuentes disponibles. Luego, se explorará, a partir de nuestro propios datos de investigación, los determinantes del acceso al empleo, en particular el empleo cualificado, en un marco analítico que tiene en cuenta las características individuales de los trabajadores, las características de la explotación agropastoral a la cual pertenecen, y las características del medio ambiente económico en el que viven y que determina el conjunto de las oportunidades de empleo. Por último, se analizará los efectos potenciales de la liberalización y de la apertura económica sobre las variables pertinentes que afectan el acceso al empleo.

2. FUENTES DE DATOS

El análisis del empleo en el medio rural en el Perú afronta la dificultad de reunir datos precisos y fiables. Las estadísticas nacionales, aunque de una calidad satisfactoria, miden muy mal el empleo rural. La imperfección de la medida resulta esencialmente de la inadecuación de las metodologías de encuesta para medir la multiplicidad de las formas de empleo en el medio rural y el carácter estacional del empleo agrícola. Tres grandes carencias caracterizan estas metodologías: la definición de la población investigada que excluye a veces a los individuos cuya edad es inferior a 14 años, la elección de la semana que precede la encuesta como período de referencia que se aplica a cuestiones planteadas, la ambigüedad de los conceptos de ocupación principal y secundaria. Estos errores metodológicos generan una subvalorización no solamente del nivel del empleo y de los ingresos de los trabajadores rurales, sino también de su diversidad (Phélinas, 2003).

Ahora bien el análisis de los determinantes del acceso al empleo (agrícola o no agrícola) requiere información no solamente sobre la cantidad y la "calidad" de los empleos ocupados por los miembros de las unidades agropecuarias, sino también sobre las características de los trabajadores y las propiedades del medio ambiente en el cual viven. Con el fin de completar la información existente, el autor realizó la investigación con una muestra de 300 hogares rurales situados en tres provincias de Perú, seleccionadas según tres principios: zonas que presentan un dinamismo económico contrastado, condiciones de producción agrícola diversificadas, distancias variadas con relación a los centros urbanos o a un eje de comunicación importante.

Las provincias investigadas se seleccionaron después de un análisis meticuloso de varias fuentes (INEI, 1994 y 2001; de Mazurek, 1998; Gonzales de Olarte, 1982; Pulgar Vidal, 1970). Están situadas en tres regiones muy diferentes tanto desde el punto de vista geográfico, como ecológico, y económico: Trujillo en el departamento de La Libertad (costa), Celendin en el departamento de Cajamarca (sierra), y La Convención en el departamento de Cusco (selva alta). La provincia de Trujillo presenta las condiciones de empleo más favorables gracias a un clima clemente, a la existencia de infraestructuras de riego que aumentan la capacidad de absorción de la mano de obra en la agricultura y por la proximidad a la ciudad de Trujillo, que es la capital departamental. Por otra parte, el departamento de La Libertad, dónde se encuentra esta provincia, cuenta con un 18% de hogares que viven por debajo de la línea de pobreza, lo que lo clasifica como uno de los ocho departamentos más "ricos" de Perú. La provincia de Celendin ilustra evidentemente una situación menos favorable debido a la vez a la pobreza del sector agrícola imputable al rigor del clima y al tamaño pequeño de la ciudad. Esta provincia se sitúa en la *Sierra* donde se concentra la pobreza rural: un 77,4% de los individuos que viven en la provincia de Celendin no tienen un nivel de ingreso suficiente para adquirir la cesta de consumo básico. No obstante, se conecta bastante bien con la capital departamental que es Cajamarca. Por último, la provincia de La Convención se caracteriza por tener una agricultura bastante próspera gracias al cultivo de café y por estar próxima a una ciudad de mediana importancia (Quillabamba), en cambio es una zona muy distante de la capital departamental (Cusco) y mal servida por una red de carreteras en mal estado. Además un 75,3%

de la población del departamento de Cusco al cual pertenece esta provincia es considerada pobre (INEI, 2002).

El muestreo se realizó según los métodos estándares de sorteo aleatorio a partir de listas de los hogares agropecuarios de cada una de las zonas. La base de datos está formada por 303 unidades agropecuarias que incluyen 1418 personas. El trabajo de campo se realizó entre los meses de septiembre y octubre de 2002, y las cuestiones se refieren a la campaña agraria 2001-2002.

3. EL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL: ESTADO DE LOS LUGARES

3.1.1. ¿Están subempleados los trabajadores rurales?

Una de las características habituales del medio rural es la baja tasa de desempleo abierto. En el Perú, varía según las fuentes entre 1,5% y un 2,7% de la población activa agrícola. Esta ausencia de individuos sin empleos se explica de varias maneras. Refleja en primer lugar la racionalidad económica de las unidades agropecuarias peruanas, ampliamente documentada en literatura (Golte, 1980; Caballero, 1981; Gonzales de Olarte, 1994), basada en la maximización de la producción más que en la maximización de la ganancia, lo que implica el empleo de toda la mano de obra familiar disponible (en vez de emplear a aquellos trabajadores cuyo producto marginal es positivo). Esta lógica de organización de la producción produce pocos desocupados pero crea trabajadores poco productivos que difícilmente pueden tomar a su cargo un alto número de dependientes. En este contexto, los vínculos familiares y comunitarios funcionan como un tipo de seguro contra el desempleo o un tipo de seguridad social informal entre los individuos. Se ponen en juego cada vez que se trata de asignar un empleo y en consecuencia de garantizar un ingreso mínimo a cada uno de los miembros de la comunidad en edad de trabajar.

No obstante, como la casi totalidad de los individuos trabajan, la primera cuestión que se debe enfrentar es la del subempleo posible de los trabajadores. Delimitar el concepto de subempleo y medirlo con la mejor precisión no es cosa fácil. Se considera que el subempleo engloba a los trabajadores afectados por una escasa duración de trabajo por razones económicas, técnicas o estructurales². Para apreciar la medida en la cual los miembros de las unidades agropecuarias están subempleados, un primer trabajo consiste en calcular el número de días trabajados por año.

El resultado más destacado que aparece inmediatamente en el cuadro 1 es el número limitado, aunque variable, de días trabajados por año en las tres provincias muestreadas: 187 días en término medio en Trujillo, 162 en Celendin y 104 en La Convención, lo que representa alrededor de 5 y 8 meses. Aunque el número de días laborables al año considerado como normal varía considerablemente según la profesión o la actividad, estas cifras indican que una cantidad no desdeñable de tiempo productivo sigue siendo inutilizada y que los trabajadores rurales sufren, en término medio, de subempleo crónico.

Se pueden definir dos causas principales de este subempleo manifiesto. En primer lugar, la agricultura y la ganadería reunidas tienen una capacidad de absorción de mano de obra limitada, incluso en zonas donde el cultivo es elevado gracias al riego (Trujillo) y aun en las zonas dominadas por la intensa mano de obra para cultivos intensivos como el café (La Convención). Seguidamente, las oportunidades de empleo alternativo se distribuyen en forma desigual entre las provincias investigadas. Por último, las disparidades en los costos de transacciones soportadas por los trabajadores cuando entran en el mercado laboral varían de una provincia a otra.

La accesibilidad a las zonas rurales que resulta de una red de comunicación bien desarrollada y relativamente en buen estado, la proximidad a la capital de departamento (Trujillo), y por lo tanto la existencia de mercados dinámicos, tanto para los productos como para los factores, explica la importancia

² Se habla en este caso de subempleo visible. El concepto de subempleo invisible, que es frecuentemente mencionado en la literatura, se refiere a una mala distribución de los recursos y de la mano de obra o a un desequilibrio estructural entre mano de obra y los otros factores de producción. Esto sobrepasa el marco analítico de nuestro estudio.

de empleos alternativos en la distribución del tiempo de los trabajadores en Trujillo. En cambio, las zonas de Celendin y de una manera aún más probatoria la de La Convencion, se caracterizan por la falta de oportunidades de empleo, otros más que el autoempleo en estrechos mercados locales a grandes distancias de los centros de población empeoradas por la baja calidad de las carreteras. En consecuencia, los trabajadores de estas dos provincias, más distantes de las capitales departamentales y menos móviles, no pueden emplearse fácilmente en actividades alternativas.

Cuadro 1: Número de días trabajados por año y por trabajador ocupado

	Trujillo				Celendin				La Convencion			
	Homb.	Mujer.	Niños	Total	Homb.	Mujer.	Niños	Total	Homb.	Mujer.	Niños	Total
Auto empleo agropastoral	93	68	33	78	98	64	31	75	100	78	39	81
Empleo alternativo	151	80	11	109	61	130	15	87	26	28	3	23
Total días de trabajo	243	149	44	187	159	194	46	162	126	106	43	104

FUENTE: Proyecto IEP/IRD, 2001/2002, Encuesta sobre la medición del empleo rural

A nivel de la unidad agropecuaria, los hombres trabajan en promedio más días que las mujeres. Una de las razones de esta divergencia es la carga de las tareas domésticas y familiares que incumbe principalmente a las mujeres. El subempleo puede así aparecer, en el caso de las mujeres, como un método de conciliación entre actividad profesional y vida familiar. No obstante este desequilibrio entre hombres y mujeres tiene otras explicaciones: desigualdades de calificación y de remuneración que hacen que, en una pareja, el que gana menos trabaja menos en el sector comercial. Los niños efectúan un bajo número anual de días laborables (de 3 a 15). Dedicán la mayor parte de su tiempo a la ganadería, actividad consumidora de tiempo pero poco intensa, y compatible con la escolaridad.

3.1.2. La nomenclatura de los empleos y ramas de actividad

Otra manera de apreciar la situación del empleo en el medio rural es estudiar la distribución de los empleos ocupados por los trabajadores en las distintas bases de datos disponibles y utilizando las categorías estadísticas existentes³. Se notará en primer lugar la gran convergencia de las distintas fuentes en la parte relativa de cada profesión en el empleo total. Esta convergencia indica que la omisión de un gran número de empleos secundarios en las investigaciones nacionales afecta poco la distribución de los empleos. Este resultado se debe en parte a la gran concentración de los empleos ocupados en tres o cuatro profesiones. Por consiguiente, la distribución de los empleos que faltan es necesariamente cercana a la de los empleos registrados.

La profesión dominante es por supuesto "agricultor" y las distintas fuentes de datos indican porcentajes muy cercanos (alrededor del 65% de los empleos ocupados). El predominio de la profesión agricultor se debe ciertamente a la definición de la muestra. Pero la agricultura y la ganadería ocupan raramente a todos los individuos de una misma explotación a tiempo completo. Los otros empleos representan así un 35% de los empleos ocupados y se distribuyen en dos grandes categorías que están por orden de importancia los empleos de obreros (agrícolas o no), y los empleos de comerciantes. Todas las demás categorías socio-profesionales representan una parte poco importante de los empleos ocupados, casi siempre menos de 1%.

³ Se eligieron fuentes nacionales que presentaban un grado suficiente de coherencia (año de realización, fecha de realización de la encuesta) con el fin de enfrentarlos a nuestros propios datos de investigación. Esta yuxtaposición no permite comparar directamente las fuentes entre ellas, ya que metodologías y muestreos divergen, pero permite apreciar en qué medida las conclusiones que se pueden lograr de cada una de ellas coinciden. Este trabajo de comparación requirió un gran esfuerzo para la reconstrucción de las categorías socio profesionales utilizadas en las encuestas nacionales con el fin de volverlas compatibles entre ellas y con nuestra propia investigación. Se agrupó en una misma categoría "agricultor" todas las ocupaciones que corresponden a los trabajos dedicados a la unidad agropecuaria. Todas las otras ocupaciones se han contado como empleo alternativo.

La distribución de los empleos según las regiones naturales de Perú es bastante homogénea. No obstante, el empleo de agricultor es relativamente menos numeroso en la costa con relación a las otras regiones. Esta gran diversidad de empleos ocupados puede interpretarse de tres maneras. Puede ser en primer lugar la consecuencia de ingresos agrícolas por cabeza más elevados, que tienen efectos “arriba” (inversión de excedentes de explotación en actividades alternativas) y “abajo” (aumento del consumo de bienes manufacturados) en la creación de empresas, que son, a su vez, la fuente del aumento y la diversidad de los empleos localmente disponibles. En segundo lugar, vemos que la diversidad de los empleos ocupados resulta de la proximidad a los grandes centros urbanos que ofrecen un mayor número de empleos, y de la existencia de una red de comunicación en buen estado que facilita la inserción de los individuos en el mercado de trabajo. Por último, es también el resultado de una proporción mayor de trabajadores que siguieron estudios superiores. Los agricultores de la Sierra y de la Selva, al contrario, se comprometen menos en actividades alternativas. Más distantes de las capitales departamentales, menos o mal servidas por la red de comunicación y menos dotadas en trabajadores calificados, las características de estas provincias tienden a frenar el desarrollo de actividades no agrícolas.

Cuadro 2: Distribución de los empleos ocupados por los miembros de las unidades agropecuarias

	INEI				CUANTO				IEP/IRD			
	Costa	Sierra	Selva	Perú	Costa	Sierra	Selva	Perú	Costa	Sierra	Selva	Perú
Fuerzas armadas y policiales	0,3	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Miembros del poder ejecutivo	0,7	0,2	0,2	0,3	0,2	1,2	0,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Profesionales, científicos e intelectuales	2,6	1,2	0,7	1,3	0,9	1,5	1,3	1,7	1,2	3,1	0,7	1,6
Técnicos	1,1	0,7	0,7	0,7	0,4	0,7	0,7	0,7	2,8	1,1	0,7	1,6
Empleados de oficina	0,2	0,2	0,6	0,2	1,0	0,7	0,5	0,7	0,4	0,4	0,9	0,6
Vendedores e comerciantes	11,7	6,2	7,2	7,2	4,5	7,3	7,1	7,6	12,4	8,2	5,7	8,9
Agricultores, criadores, pesqueros	55,8	70,7	68,9	68,2	58,0	66,3	67,2	64,2	58,8	63,1	76,6	65,8
Obreros	15,2	14,6	12,0	14,1	15,0	11,5	8,9	10,8	16,6	18,1	5,0	13,4
Peones	12,4	6,4	9,6	7,9	19,9	10,8	13,8	13,3	7,9	6,0	10,4	8,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTES: INEI, 2000, Encuesta Nacional a hogares, especializada en niveles de empleo

CUANTO, 2000, Encuesta Nacional sobre la medición de niveles de vacío

Proyecto IEP/IRD, 2001/2002, Encuesta sobre la medición del empleo rural

El empleo asalariado agrícola es poco desarrollado. La estructura agraria de Perú, caracterizada por numerosas explotaciones de pequeño tamaño es poco favorable al desarrollo de un amplio mercado de trabajo asalariado agrícola. El mercado laboral agrícola, en la mayoría de los pueblos, es muy local y consiste principalmente en transacciones de mano de obra entre agricultores del mismo rango. No obstante, el desarrollo particular de la agricultura en las zonas que producen para la exportación o especializadas en cultivos que requieran una alta intensidad de mano de obra, ubicadas ya sea en la costa (caña de azúcar) o en la selva (café), ha originado la demanda de trabajo asalariado. El número de empleos de peones en la costa y en la selva es relativamente más elevado que en la Sierra donde las condiciones de producción, (baja productividad, bajos precios de los productos agrícolas) no permiten remunerar días de trabajo exteriores.

La distribución de las ramas en las cuales se emplean a los trabajadores rurales confirma el predominio de la agricultura y en una medida menos elevada la importancia de dos otros sectores de actividad, que son el comercio con un poco menos del 10% de empleos y las industrias manufactureras con alrededor de 5% de empleos. Las otras ramas como la construcción, el transporte y las comunicaciones, la hostelería y la restauración, la enseñanza, y los servicios ofrecen cada una más o menos 2% de empleos. Esta distribución varía poco entre las tres grandes regiones naturales de Perú. La agricultura domina en los sectores de actividades en todas las regiones y el comercio aparece como el segundo sector proveedor de empleos. Las industrias manufactureras son relativamente privilegiadas por

los agricultores de la Sierra especializados en actividades artesanales. El sector de los servicios que agrupa en el sector público, la enseñanza, la administración pública, la defensa, la salud, y, en el sector privado los servicios a hogares, representa una proporción casi constante del empleo en las tres grandes regiones de Perú.

Cuadro 3: Distribución de las ramas de actividad de los miembros de explotaciones agrarias

	INEI				CUANTO				IEP/IRD			
	Costa	Sierra	Selva	Perú	Costa	Sierra	Selva	Perú	Costa	Sierra	Selva	Perú
Agricultura, ganadería, caza, pesca	68,8	71,5	74,1	76,3	76,1	75,2	80,3	76,2	70,0	74,3	87,9	74,6
Explotaciones de minas y canteras	0,0	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,5	0,2	0,2	0,2	0,5	0,1
Industrias manufactureras	4,7	7,2	4,0	5,3	4,8	4,0	2,2	3,2	2,3	10,0	1,1	5,7
Suministro de electricidad, gaz y agu	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,1
Construcción	1,2	2,5	1,1	1,7	2,5	2,3	1,2	1,8	2,1	1,4	1,4	1,9
Comercio	15,1	11,2	7,2	9,6	9,3	8,9	8,4	9,7	12,5	6,0	4,8	8,9
Hoteles y restaurantes	2,0	2,1	1,4	1,7	1,1	1,7	1,4	1,5	1,2	0,5	0,7	1,4
Transporte y comunicaciones	2,1	1,6	1,1	1,4	1,8	2,0	1,6	1,8	5,7	0,5	0,7	2,4
Intermediación Financiera	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1
Actividades Inmobiliarias	1,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,4	0,2	0,3	0,4	0,0	0,2	0,0
Administración publica y defensa	0,6	0,7	0,9	0,6	1,4	1,1	0,7	1,1	1,2	2,4	0,9	1,3
Enseñanza privada	3,8	1,3	1,4	1,2	0,7	1,5	1,0	1,5	1,2	2,6	1,4	1,8
Actividades de servicios	0,7	1,4	1,9	1,6	2,1	2,6	2,4	2,5	2,7	2,1	0,0	1,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

FUENTES: INEI, 2000, Encuesta Nacional a hogares, especializada en niveles de empleo
 CUANTO, 2000, Encuesta Nacional sobre la medición de niveles de vacio
 Proyecto IEP/IRD, 2001/2002, Encuesta sobre la medición del empleo rural

3.1.3. La calidad de los empleos alternativos ocupados

Uno de los problemas persistentes de la economía peruana es su escasa propensión para crear empleos productivos y bien remunerados. Esta cuestión se plantea, en el medio rural, con una acuidad particular ya que la calidad de los empleos ocupados por los trabajadores rurales cuando no trabajan en su propia chacra es muy heterogénea. En consecuencia los ingresos que resultan de las ocupaciones alternativas aún no ofrecen posibilidades reales de mejora del nivel de vida de las poblaciones rurales.

La clasificación de los empleos según la profesión ejercida por los trabajadores solo da una idea vaga de la calidad de empleos ocupados y por lo tanto de los ingresos que generan. Pero dar una definición estadística precisa de la calidad de un empleo no es simple. La calidad puede analizarse como una función de un conjunto de atributos. En consecuencia, la construcción de un indicador de calidad es siempre cuestionable primero porque numerosos factores pueden ser retenidos (productividad, nivel de ingreso, estabilidad, número de días anuales trabajados etc.) y segundo porque cada trabajador puede ponderar diferentemente los distintos componentes.

Un análisis meticoloso de los empleos ocupados por los trabajadores rurales revela la dualidad pronunciada de estos empleos según dos dimensiones. La primera dimensión se refiere a la productividad de los empleos ocupados. Se puede distinguir un primer conjunto de empleos ofrecidos por empresas que utilizan técnicas rudimentarias, de tamaño muy pequeño, empleando a menudo una única persona, poco cualificada, y aisladas no solamente de los mercados urbanos sino también de las otras empresas que fabrican productos similares. Estos empleos son a menudo afectados a los que no llegan a encontrar un mejor empleo y obtener mayores ingresos. A estos empleos tradicionales se puede oponer un segundo conjunto, descrito por Ranis y Stewart (1993) que son ofrecidos por empresas relativamente estables, de tamaño mediano, cuyo objetivo es el maximización del beneficio, utilizando trabajo asalariado y un cierto grado de sofisticación técnica, recurriendo a una mayor calificación de trabajo, requiriendo de un capital

financiero y físico importante y cuyas fuentes de demanda se sitúan en los mercados nacionales urbanos o en los mercados de exportación. Este segmento del mercado laboral ofrece generalmente empleos estables y correctamente remunerados.

Esta dicotomía de los empleos ocupados sugiere utilizar la remuneración a fin de ordenarlos y evitar el delicado problema de la clasificación jerárquica de las categorías de empleo. La remuneración es claramente una variable ordenada y la comparación de las remuneraciones asociadas a cada empleo permite clasificar estos últimos en función de su rentabilidad « salarial ». Queda a definir la línea que divide los empleos entre los altamente productivos que se asimilarán a los empleos cualificados y los débilmente productivos que constituirán el grupo de los empleos no cualificados. Si el mercado laboral funciona de manera satisfactoria, la productividad marginal de los empleos del primer grupo debería acercarse a la productividad del trabajo agrícola. Se debe esperar que los ingresos sacados de estos empleos se acerquen a ellos de los jornaleros agrícolas. El jornal agrícola nos sirve pues para separar los empleos en empleo cualificado y no cualificado⁴, el grupo de los empleos cualificados se compone de los empleos cuya remuneración es estrictamente superior al salario agrícola.

La segunda dimensión que divide los empleos ofrecidos en el medio rural en dos grupos, es el estatuto del trabajador. En las condiciones que prevalecen habitualmente en el medio rural, el mercado laboral es casi inexistente, al menos durante algunos períodos del año. Por lo tanto, el auto empleo es un fenómeno muy frecuente: entre un tercio y la mitad de los empleos ocupados son empleos de trabajadores independientes. La importancia relativa del empleo independiente se interpreta a menudo como uno señal de pobreza. Esta interpretación ve el autoempleo como un refugio para los trabajadores que no disponen de las calificaciones requeridas por los segmentos más lucrativos del mercado laboral o como una respuesta a situaciones de oferta excesiva de fuerza de trabajo en el mercado laboral. Sin embargo, algunas actividades manufactureras o de transporte pueden verse como formas de proto industrialización y la dispersión de las ganancias diarias de los trabajadores independientes atesta la variedad de las actividades creadas. Además la desagregación de los empleos según el estatuto permite definir las lógicas que empujan a los individuos a crear su propia actividad (job makers) antes que ofrecer su fuerza de trabajo (job takers). El predominio del auto empleo informa sobre los costos de transacciones sufragados por los trabajadores cuando ingresan al mercado laboral.

Cuadro 4: Distribución de los empleos según su cualidad

	Trujillo				Celendin				La Convencion			
	Homb.	Mujer.	Niños	Total	Homb.	Mujer.	Niños	Total	Homb.	Mujer.	Niños	Total
Auto empleo agrícola	53,4	66,7	66,7	59,7	68,8	57,7	89,7	65,3	77,0	76,3	88,1	79,2
Empleo alternativo <i>del cual</i>	46,6	33,3	33,3	40,3	31,2	42,3	10,3	34,7	23,0	23,7	11,9	20,8
Auto-empleo no agrícola calificado	14,8	26,2	0,0	17,4	19,0	15,6	0,0	16,4	16,3	11,9	0,0	13,5
Auto-empleo no agrícola no calificado	21,3	41,5	14,3	27,4	10,3	61,1	75,0	42,1	9,3	21,4	12,5	15,7
Asalariado calificado	27,0	10,8	0,0	19,9	29,3	10,0	0,0	17,1	27,9	11,9	0,0	18,0
Asalariado no calificado	36,9	21,5	85,7	35,3	41,4	13,3	25,0	24,3	46,5	54,8	87,5	52,8
Total empleo alternativo calificado	41,8	36,9	0,0	37,3	48,3	25,6	0,0	33,6	44,2	23,8	0,0	31,5
Total empleo alternativo no calificado	58,2	63,1	100,0	62,7	51,7	74,4	100,0	66,4	55,8	76,2	100,0	68,5

FUENTE: Proyecto IEP/IRD, 2001/2002, Encuesta sobre la medición del empleo rural

El cuadro 4 presenta la distribución de los empleos ocupados por los trabajadores rurales peruanos según su cualidad. Más del 60% de los empleos ocupados fuera de la unidad agropecuaria son empleos no

⁴ Se utiliza indiferentemente los siguientes pares de contrarios: calificado/no calificado, altamente productivo/débilmente productivo, bien remunerado/mal remunerado

cualificados, y este porcentaje es relativamente estable según las provincias. El auto empleo no agrícola aparece como una categoría que agrupa actividades especialmente mal remuneradas: un 17% de estos empleos ofrecen una remuneración superior a un día de salario agrícola. Los empleos asalariados cualificados no sobrepasan el 20% del total de los empleos. Los empleos cualificados, independientes o asalariados están ocupados por los hombres. La división del trabajo relega a las mujeres en actividades que ofrecen pocas perspectivas financieras. Los niños ocupan exclusivamente empleos no cualificados.

4. LOS FACTORES DE ELECCIÓN DE EMPLEO

Con el fin de testar el impacto del acceso al empleo de numerosas variables sobre las cuales la política económica puede ejercer sus efectos, se construyó un modelo de regresión logística multinomial. La variable endógena representa el abanico de las ocupaciones posibles que comprende cinco modalidades que son: el auto empleo agrícola, el auto empleo no agrícola cualificado, el auto empleo no agrícola no cualificado, el asalariado cualificado, el asalariado no cualificado. La modalidad auto empleo agrícola es la modalidad de referencia y agrupa a los individuos que trabajan exclusivamente en la unidad agropecuaria. Todas las otras modalidades corresponden a individuos que ocuparon un empleo alternativo durante la campaña agrícola 2001-2002 y que trabajaron, o no, en la chacra.

El modelo es construido sobre la idea siguiente: sea una muestra de n individuos, distribuidos en J categorías separadas. Cada individuo i pertenece a una categoría j entre los J posibles. Es descrito por un conjunto de K características $x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{ik}$ (por ejemplo su edad, sexo, nivel de estudios, su lugar de residencia etc). La probabilidad que el individuo i , teniendo en cuenta sus características x_{ik} forme parte de la categoría j se supone depender de los x_{ik} . La probabilidad de realización de la modalidad j con relación a todas las demás modalidades es dada por:

$$P(j/x_i) = \frac{1}{1 + \sum_{h=1}^{J-1} \exp(x_i \beta_h)} \quad \text{pour } j = 1, 2, \dots, J.$$

Los resultados de la regresión aparecen en un primer cuadro presentado en la forma generalmente adoptada por los economistas. Muestra por cada categoría comparada a la categoría de referencia los valores de los parámetros de cada variable explicativa, sus desviaciones estándares (entre paréntesis) y una indicación de su significatividad (los asteriscos). El valor estimado de los coeficientes nos informa sobre el sentido positivo o negativo del efecto de la variable sobre la probabilidad de pertenecer a una categoría dada y también nos da una indicación sobre su amplitud. Nos permite situar las categorías, las unas con relación a las otras pero no puede interpretarse directamente como una probabilidad (representa el logaritmo de la probabilidad (log-likelihood) de caer en una categoría antes que en otra). En cambio, la significatividad se interpreta como en una regresión lineal. Nos indica si el parámetro es diferente a cero, es decir, si la variable asociada tiene realmente un efecto sobre la pertenencia a una categoría antes que a la categoría de referencia.

Se presentan también varios indicadores que permiten juzgar la calidad del ajuste del modelo. El logaritmo de la probabilidad y el Chi-dos que le es asociado; un pseudo R^2 quién es un equivalente del coeficiente de determinación empírica R^2 del modelo lineal clásico; el indicador de la capacidad de predicción del modelo que calcula a partir de las probabilidades predichas por el modelo y las probabilidades reales observadas en los datos, una tasa de buenos resultados, indicando el número de veces donde la categoría predicha y la categoría observada son las mismas. En general, los coeficientes de las variables del modelo aparecen con el signo esperado y son significativos.

Uno de los inconvenientes de la presentación del cuadro 5 es de ser tributario de la definición de la modalidad de referencia, para la cual no se dispone de las estimaciones de los parámetros. En efecto, el modelo logístico mide el efecto de una variable explicativa sobre la probabilidad de pertenecer a la

Cuadro 5: Estimación logística de la elección de empleo

	Auto empleo non agrícola cualificado	Auto empleo non agrícola no cualificado	Asalariado no cualificado	Asalariado cualificado
<i>Características de la unidad agropecuaria</i>				
Superficie en cultivos	-0,112 (0,087)	-0,342*** (0,106)	-0,241*** (0,076)	-0,152* (0,092)
Porcentaje de superficie irrigada	-0,022 (0,073)	0,015 (0,052)	-0,277* (0,147)	0,051 (0,061)
Número de ganado vacuno	0,043 (0,027)	-0,076** (0,037)	-0,078** (0,038)	0,007 (0,035)
<i>Tamaño y composición la familia</i>				
Número de trabajadores	-0,076 (0,061)	0,113*** (0,043)	-0,060 (0,053)	0,017 (0,054)
Porcentaje de mujeres	0,084 (0,728)	-0,386 (0,646)	0,903 (0,582)	2,401*** (0,864)
<i>Características personales</i>				
Edad	0,132*** (0,037)	0,135*** (0,031)	0,173*** (0,032)	0,372*** (0,065)
Edad ²	-0,002*** (0,000)	-0,002*** (0,000)	-0,003*** (0,000)	-0,005*** (0,000)
Sexo (masculino=1)	0,009 (0,288)	-0,835*** (0,260)	0,823*** (0,229)	1,688*** (0,349)
Capacitación laboral (sí=1)	0,835** (0,330)	0,007 (0,338)	0,298 (0,300)	1,541*** (0,328)
Número de meses de experiencia profesional	0,006*** (0,001)	0,009*** (0,001)	0,000 (0,002)	0,007*** (0,002)
Educación secundaria (sí=1)	0,901** (0,320)	0,397 (0,269)	0,190 (0,235)	0,921** (0,363)
Educación superior (sí=1)	0,043 (0,585)	0,578 (0,427)	0,461 (0,405)	1,541*** (0,457)
<i>VARIABLES DE LOCALIZACIÓN</i>				
Trujillo (sí=1)	1,138*** (0,412)	1,321*** (0,367)	1,079*** (0,312)	0,793* (0,410)
Celendin (sí=1)	0,796* (0,449)	1,248*** (0,404)	0,376 (0,331)	0,592 (0,471)
La Convencion (modalidad de referencia)				
Log de la probabilidad			1892,878	
Chi-dos (56)			587,267	
Seudo R ²			0,48	
% de de clasificación correcta			65,2	
N (1018)	73	126	131	79

* Significativo a 10%

** Significativo a 5%

*** Significativo a 1%

categoría antes que a la categoría de referencia, o más concretamente, sobre el cociente entre la probabilidad de pertenecer a la categoría y la probabilidad de pertenecer a la categoría de referencia. Para que los resultados no dependan de la modalidad de referencia, una solución consiste en calcular los efectos medios de las variables explicativas sobre cada una de las modalidades posibles. Los resultados

presentados en el cuadro 6 son diferencias de probabilidades predichas por el modelo en vez de los parámetros considerados. Este método permite calcular el efecto de cada variable por un número de puntos de probabilidad y por lo tanto de dar una evaluación directa de los pesos respectivos de las variables explicativas. Los resultados de los dos cuadros se comentan simultáneamente.

Cuadro 6: Efectos⁽¹⁾ medios de las variables explicativas sobre la probabilidad de pertenencia a las categorías de empleo (%)

	Auto empleo no agrícola cualificado	Auto empleo no agrícola no cualificado	Asalariado no cualificado	Asalariado cualificado	Auto empleo agrícola
<i>Características de la unidad agropecuaria</i>					
Superficie en cultivos	-0,08	-0,80	-0,86	-0,14	1,88
Porcentaje de superficie irrigada	-0,05	-0,15	-0,52	-0,03	0,75
Número de ganado vacuno	0,13	-0,30	-0,13	0,01	0,29
<i>Tamaño y composición la familia</i>					
Número de trabajadores	-0,27	0,39	0,03	-0,13	-0,02
Porcentaje de mujeres	-4,69	-8,56	-1,83	16,89	-1,81
<i>Características personales</i>					
Edad	0,47	0,66	0,26	-1,75	0,36
Edad ²	-0,01	-0,01	0,00	0,02	0,00
Sexo (masculino)	-0,45	-35,80	1,17	39,58	-4,51
Capacitación laboral	0,12	-8,80	-2,43	13,04	-1,93
Número de meses de experiencia profesional	1,10	-1,03	-1,13	1,14	-0,08
Educación secundaria	2,61	-1,89	-2,23	2,57	-1,06
Educación superior	2,62	-1,92	-2,40	12,65	-10,95
<i>Variables de localización</i>					
Trujillo	2,34	1,88	1,97	2,37	-8,56
Celendín	2,40	2,38	2,08	1,92	-8,79
La Convencion (modalidad de referencia)					

(1) derivadas medias para las variables cuantitativas

diferencias medias de las probabilidades predichas para las variables cualitativas

La cantidad de recursos en agua, en tierra y en animales a disposición de una unidad agropecuaria constituye un buen indicador de la capacidad de absorción de la mano de obra familiar en la unidad. Determina también la participación de sus miembros en las transacciones en el mercado laboral.

Estas tres variables en general son asociadas negativamente a la probabilidad de ocupar empleos asalariados o independientes no cualificados y positivamente a la probabilidad de ser exclusivamente agricultor. Son sin efecto estadístico significativo sobre la probabilidad de ocupar un empleo cualificado. Así pues, el aumento de una unidad de superficie de cultivo aumenta de un casi 2% la probabilidad que un individuo sea exclusivamente agricultor, y disminuye cerca de 1% la probabilidad de que ejerza un empleo alternativo no cualificado. De la misma manera, el aumento de un punto en el porcentaje de la superficie irrigada aumenta en un 0,75% la probabilidad que un individuo sea exclusivamente agricultor y disminuye alrededor de un medio punto la probabilidad de que ejerza un empleo asalariado no cualificado. Las variaciones en estas dos variables afectan muy poco la probabilidad de que un individuo ejerza un empleo cualificado.

Estos resultados tienen coherencia con la baja capacidad del mercado de tierra para adaptar la dotación en tierras de la unidad agropecuaria a la dotación en trabajo. La disminución o la imposibilidad de extender la superficie cultivada se traduce por una oferta de trabajo en empleos alternativos. Por lo

tanto, las unidades que disponen de un excedente de trabajo recurren únicamente al segmento del mercado de trabajo que corresponde a los empleos no cualificados para absorber su mano de obra excedente. La estrategia familiar que resalta de ese comportamiento es una estrategia de optimización del ingreso a través de la distribución óptima de los activos entre los distintos tipos de empleo posible. Los más instruidos y experimentados son afectados a los empleos cualificados. El resto de la mano de obra se asigna a la agricultura o a empleos alternativos menos cualificados.

El aumento del número de ganado bovino aumenta no solamente la probabilidad de ser exclusivamente agricultor sino también la de ocupar un empleo independiente. Ese resultado confirma el potencial de la transformación de subproductos animales como fuente de empleo alternativo, resaltando los vínculos entre la ganadería y los otros sectores de la economía.

El porcentaje de mujeres que viven en el hogar se correlaciona positivamente con la probabilidad de ejercer un empleo asalariado cualificado. El aumento en un punto en este porcentaje mejora la probabilidad de ocupar un empleo asalariado calificado un 17%. Este resultado se explica por el hecho de que las mujeres dedican la mayor parte de su tiempo a los inactivos, lo que libera tiempo productivo masculino que se destina prioritariamente a los empleos asalariados. Además las limitaciones que se oponen al empleo femenino, como la dificultad de acceso al mercado laboral y la asignación sistemática de actividades menos lucrativas, impone hasta cierto punto a los hombres el ejercicio de un empleo bien remunerado con el fin de garantizar la supervivencia del grupo familiar.

Nuestros resultados destacan la importancia del capital humano sobre la capacidad de los trabajadores para ejercer un empleo cualificado. Los individuos que tienen una formación más amplia tienden a ocupar los empleos más atractivos. Este hecho se refuerza con los niveles superiores de educación. Una formación universitaria es especialmente significativa para el acceso a empleos asalariados cualificados que son los empleos los más remunerados y los más estables. El hecho de tener un nivel de estudios superior aumenta un 13% la probabilidad de ejercer un empleo asalariado cualificado. El rendimiento secundario aparece también elevado pero deja abierta la posibilidad de elegir un estatuto (independiente o asalariado). La formación profesional tiene un efecto de una magnitud cercana del de la formación superior sobre las características de los empleos accesibles: aumenta un 13% la probabilidad de ejercer un empleo asalariado cualificado. La antigüedad en el ejercicio de un oficio, que es una variable indicadora de la calificación adquirida, tiene un efecto muy significativo sobre la probabilidad de ejercer un empleo alternativo, excepto cuando se trata de un empleo asalariado no cualificado. La explicación, en este último caso, debe buscarse del lado de la diversidad de los empleos asalariados no cualificados y de la corta duración de los "contratos" de trabajo vinculados a estos empleos. Estas dos características impiden que se adquieran altas competencias rentables en el mercado laboral. En cambio, un año de experiencia suplementaria en un empleo cualificado, asalariado o no, aumenta la probabilidad de ocupar de nuevo este tipo de empleo en más de 1%.

Las otras características individuales influyen también de una manera significativa en la elección de un empleo. El pertenecer al sexo masculino aumenta un 40% la probabilidad de ejercer un empleo asalariado calificado y un 1% solamente la de ejercer un empleo asalariado no calificado. En cambio, es asociada negativamente al auto empleo no cualificado, lo que confirma la división tradicional del trabajo entre los hombres y las mujeres que conduce a estas últimas a relegarse en empleos mal remunerados en los cuales son auto empleadas. La edad se correlaciona positivamente en casi todas las formas de empleo, aunque de manera decreciente, ya que a medida que los individuos envejecen, su propensión a ejercer un empleo complementario disminuye. En cambio la edad es negativamente correlacionada al empleo asalariado cualificado, el efecto siendo más fuerte cuando los individuos llegan a una edad más avanzada. Este resultado es el índice de las diferencias de nivel de educación entre las generaciones. Son generalmente los trabajadores más jóvenes, mejor formados, los que ocupan empleos más cualificados.

Por último, el capital medioambiental medido a través de las variables indicadoras de las provincias muestreadas aparece altamente significativo en la probabilidad de ocupar un empleo, cualquiera que sea. Las provincias de Trujillo y Celendin están positivamente y significativamente asociadas al empleo de los

agricultores (la provincia de La Convención constituye la modalidad de referencia). Sin embargo, en Celendin, el capital medioambiental influye en la probabilidad de ser auto empleado pero no tiene influencia sobre la probabilidad de ser asalariado. Esta ausencia de influencia es el índice evidente de costos de transacción soportados por los trabajadores cuando entran en el mercado laboral. En efecto, el proceso por el cual los trabajadores buscan un empleo es complejo y generalmente costoso. La distancia o el tiempo que separa al trabajador de un mercado laboral, la información sobre los empleos y las remuneraciones son fundamentales para su inserción en el mercado laboral. Las distancias y las dificultades de acceso aumentan el costo de transporte, y en consecuencia el costo de todas las transacciones a distancia, incluidas las transacciones de trabajo. Los que hacen frente a los costos de transacción los más elevados tienen una escasa capacidad para articularse al mercado laboral, lo que justifica la elección de la retirada del mercado laboral o también la elección del autoempleo. En este último caso la internalización del empleo permite ahorrar los costos de transacción.

5. LOS EFECTOS DE LA LIBERALIZACIÓN SOBRE LAS VARIABLES PERTINENTES QUE AFECTAN EL EMPLEO RURAL

A partir de 1976, la economía peruana fue objeto de diferentes programas de ajuste estructural o estabilización macroeconómica. La idea que dominó la elaboración de estos programas fue la eliminación de toda interferencia entre el Estado y el mercado, este último encargándose de la asignación eficaz de los recursos. La liberalización de la economía debía así crear las condiciones favorables al crecimiento económico y al empleo. La aplicación de estos principios en el ámbito de la política agrícola se tradujo en la eliminación sistemática de los controles de precio de los productos agrícolas y de algunos factores de producción (abono, crédito), el abandono de las subvenciones al consumo, y la supresión del Banco Agrario (Gonzales de Olarte, 1996).

El balance que se puede hacer de la situación actual del empleo rural basta para convencer de que el objetivo y las medidas que se adoptaron desde hace casi 20 años no se han alcanzado. De nuestro punto de vista, el principal efecto de las políticas de liberalización ha sido indirecto y negativo. Resulta de su focalización en el corto plazo y en la restauración de equilibrios macroeconómicos que se hizo en detrimento de las políticas sectoriales. En consecuencia, el mundo rural sufre de problemas estructurales que hasta hoy no han encontrado la solución adecuada.

5.1. El empleo agrícola

En el modelo presentado en la sección anterior sobresalen dos variables importantes en la capacidad de absorción de la mano de obra en la agricultura: la tierra y el agua. En el Perú, los recursos en tierra no están en relación con la disponibilidad de fuerza de trabajo familiar: un 70% de las unidades agropastorales cultivan menos de 5 hectáreas, lo que quiere decir que una hectárea de tierra debe hacer vivir 3,4 personas en término medio (Censo, 1994). A nivel microeconómico, se trata de un problema central. Se pueden considerar teóricamente tres soluciones para reducir la presión demográfica sobre las tierras: la extensión de la frontera agrícola, el mejoramiento de la tasa de utilización de las tierras existentes, y el aumento de la intensidad de cultivos.

La extensión de la frontera agrícola es la opción ciertamente menos prometedora. En efecto, según el Ministerio de Agricultura, solo el 6% de la superficie del país es propicia a la agricultura, 14% favorables a la ganadería y la mayor parte de este reducido capital ya está explotada. La segunda manera de aliviar la carencia en tierras es optimizar la utilización de las tierras existentes. Un primer obstáculo para una mejor asignación de las tierras es la casi inexistencia de un mercado de propiedad de tierras. Según el Ministerio de Agricultura, no más del 17% de las explotaciones (o sea 27% de las superficies agrícolas) poseen parcelas tituladas y registradas en un catastro que contiene la información sobre la localización, y las características de las tierras. Una de las consecuencias de esta ausencia de emisión de títulos de propiedad

es el escaso número de transacciones de tierra: algo menos del 27% de las unidades agropecuarias se han adquirido a partir de compras de tierras. El mercado del alquiler de la tierra aparece también poco desarrollado: según el censo agrícola solo el 3,5% de las tierras cultivadas se alquilan o se explotan según formas mixtas, y apenas 10% de cultivadores son arrendatarios o propietarios-arrendatarios de las tierras que cultivan. La gran mayoría de los agricultores (70% al 93% según las provincias) poseen tierras que cultivan. Esta baja frecuencia de las formas mixtas es obviamente conectada a la escasez de tierras agrícolas disponibles. Otra razón de la escasa actividad del mercado de tierra es el poco éxito del programa de titulación. En ausencia de derechos de propiedad bien establecidos, las transacciones de tierra son aventuradas. En consecuencia, las unidades agropecuarias están en la imposibilidad de ajustar de manera óptima las tierras que cultivan en función de su dotación en trabajo. El uso a veces masivo de mano de obra exterior, asalariada o intercambiada, deja suponer que un cierto número de unidades son sobre dotadas en tierra relativamente a la mano de obra disponible.

El censo agrícola destaca otro hecho notable: durante una campaña agrícola, 51% de las tierras son inutilizadas por distintas razones (en barbecho, en descanso, tierras no trabajadas). De las entrevistas conducidas con los campesinos, resulta que la ausencia o el alto precio del agua de riego y de los fertilizantes, la falta de fondos propios o las dificultades de acceso a fuentes de crédito, explica como tierras potencialmente cultivables siguen siendo inutilizadas.

Un segundo factor significativo del potencial de creación de empleos en la agricultura es el control del agua. En el Perú, el único aporte de las lluvias no permite cultivar una parcela más de una vez por año agrícola. El control del agua autoriza una mayor intensidad de cultivos, es decir, aumentar el número de veces donde se cosecha una parcela. Una parcela de tierra irrigada puede pues considerarse como un múltiplo de una parcela no irrigada de la misma dimensión. Además el riego puede transformar en tierras agrícolas las partes del territorio inicialmente impropias a los cultivos, como lo muestra el sistema de andenes analizado por Gonzales de Olarte y Carolina Trivelli (1999). Por último, el control del agua se considera como preliminar en la utilización más amplia del capital, porque tiene un fuerte impacto en la reducción del riesgo. Para el agricultor, el riesgo de tener malas cosechas no significa solamente una disminución de producción y en consecuencia de ingresos sino también la pérdida de los insumos invertidos. Así pues, un elevado riesgo hídrico no es favorable a la inversión agrícola.

Del control del agua depende un tercer gran ámbito susceptible de actuar sobre la capacidad de absorción de mano de obra en la agricultura, es decir las técnicas de producción utilizadas. Los agricultores peruanos no pueden sobrevivir sin mejorar su productividad, lo que significa invertir en la adopción de nuevas técnicas. Todas las técnicas no son deseables en un contexto de fuerte subempleo. El riego, la utilización de semillas mejoradas e insumos como los abonos, contribuyen generalmente a aumentar los rendimientos y la intensidad de cultivo. Tienen como efecto principal el aumento de la oferta de tierra y por lo tanto el aumento de la absorción de la mano de obra en los trabajos agrícolas. Sin embargo, si la utilización de insumos intermedios se correlaciona estrechamente a variables técnicas como la respuesta de los cultivos a la contribución de abono, la disponibilidad en agua responde también a variables económicas como su costo, el acceso a los mercados de bienes y factores, la existencia de mecanismos de crédito que condicionan la rentabilidad de los distintos cultivos. Esta rentabilidad es la clave que controla las inversiones y el uso que se hace con los recursos productivos.

Ahora bien la escasez del capital es uno de los problemas principales que deben enfrentar los agricultores peruanos. Las dificultades de los campesinos para acceder a servicios financieros adecuados combinadas al costo a menudo redhibitorio de préstamos afectan negativamente la utilización de insumos y generan combinaciones productivas subóptimas. El racionamiento del crédito tiene por consiguiente tendencia a limitar la producción y las creaciones de empleo en la agricultura. Este fenómeno no data de los programas de ajuste estructural o de estabilización macroeconómica. Sin embargo, los principales hechos destacados en lo que se refiere al sector del crédito durante las décadas liberales (desaparición del Banco Agrario en 1992, eliminación de la obligación de los bancos comerciales de prestar un importe mínimo al sector agropecuario, liberalización de las tasas de interés) no contribuyó a mejorar la oferta de

préstamos en el mundo rural. La creación de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito en 1992 apenas cambió las cosas ya que no se veían obligadas a conceder una fracción importante de sus fondos en el sector agropecuario. El desarrollo de la microfinanza estableció algunas respuestas interesantes, pero la oferta de fondo sigue siendo insuficiente (Trivelli & alli, 2004). En consecuencia, 17,3% de hogares rurales tenían acceso al crédito en 2000 y solo un 27% de ellos obtuvieron un crédito de las fuentes institucionales (CUANTO, 2000). Además, el abanico de las tasas de interés practicados va del 0,4% al 20% al mes, el modo se sitúa en torno a un 5% (CUANTO, 2000).

Las razones por las cuales los campesinos tienen difícilmente acceso al crédito bancario y pagan elevadas tasas de interés se conocen bien y son imputables en gran parte a las imperfecciones del mercado de crédito en el medio rural. Una de las principales imperfecciones se debe a las dificultades de establecer con certeza la capacidad y la voluntad del prestatario de reembolsar las cuentas debidas. Los prestamistas enfrentan pues un problema de identificación y de selección de buenos prestatarios. Pero adquirir información sobre los prestatarios es costoso. Por otra parte es necesario encontrar una solución en caso de falta de pago. En consecuencia los prestamistas requieren garantías. Ahora bien la mayoría de los prestatarios no pueden proporcionar garantías tangibles, ya que no poseen un título de propiedad de las tierras que cultivan, o que poseen uno en un contexto de inactividad en el mercado de propiedad de la tierra, o que no pueden demostrar su potencial productivo, etc. Por todas estas razones, todos los que quieren y pueden pagar un crédito no lo obtienen. Además si se deja al mercado fijar la tasa de interés de un préstamo en función de criterios como el monto prestado, su término, el riesgo asociado al prestatario y la naturaleza de las garantías que puede ofrecer, las tasas de interés agrícolas son necesariamente elevadas: la mayoría de los montos prestados son pequeños con costos de transacción elevados, el nivel de riesgo en el sector agrícola es especialmente alto, y las garantías propuestas no siempre cumplen dos condiciones importantes: la facilidad de transferencia de propiedad y la ausencia de pérdida de valor en el tiempo. En consecuencia, los que obtienen un crédito lo obtienen a menudo en condiciones desfavorables.

Puesto que la inversión en la agricultura es relacionada con la rentabilidad de la actividad, el empleo agrícola depende también de los precios que los productores reciben por sus productos. Estos últimos dependen, por una parte, de la eficiencia del sistema de comercialización y por otra, según el segmento del mercado al cual se destinan, del estado de la demanda interna o de las reglas de "juego" de los mercados internacionales para los productos agrícolas. Del lado de la demanda interna, se demostró que la agricultura peruana sufre desde hace tiempo de una ruptura entre la estructura del consumo urbano y la distribución de las tierras entre los cultivos (Alvarez, 1983). La demanda solvente de la zona urbana se dirigió hacia los productos transformados cuya preparación es rápida, que son en general poco fáciles de producir en las zonas andinas. En consecuencia, los campesinos peruanos permanecen confinados en el segmento poco rentable y poco competitivo de los productos destinados al autoconsumo o en los mercados locales. La divergencia entre la oferta doméstica y la demanda urbana ha sido colmada por las importaciones, o en los períodos de crisis, por una reducción del consumo urbano de alimentos.

La incapacidad del mercado para transformar la estructura de productos cultivados en relación a las necesidades muestra las dificultades que el medio ambiente andino impone a los productores. Indica también la existencia de frenos para la transmisión de las variaciones de la demanda en los precios, debido en parte a la pobreza de las infraestructuras de comunicación en el medio rural. La falta de medios de comunicación y la escasa circulación de información sobre los precios y sus tendencias no facilitan la comercialización de los productos agrícolas. En estas condiciones, las posibilidades de desarrollo de la agricultura varían en función de la accesibilidad a las zonas rurales y de su localización. La proximidad a una ciudad y su tamaño se convierten así en variables determinantes del potencial de la demanda de productos agrícolas y de los costos de comercialización.

En segundo lugar, la elasticidad-ingreso de los productos alimentarios de tipo urbano es más fuerte que la de los productos "tradicionales". En estas condiciones, el crecimiento de los ingresos urbanos no puede traducirse en un movimiento positivo de los precios de los productos tradicionales e inducir un aumento de la oferta de productos agrícolas capaz de mejorar el empleo y los ingresos rurales. A la

inversa, la liberalización del comercio exterior, la eliminación de los controles sobre las importaciones, la disminución de barreras arancelarias, la contracción de la demanda urbana que resultó de la caída de los ingresos urbanos vinculada a los programas de estabilización y de ajuste estructural afectó poco a la mayoría de los agricultores peruanos que no producen para los mercados urbanos, excepto algunos productos a fuerte elasticidad-ingreso comercializados por los pequeños productores (carne, productos lecheros). Estos programas no fueron pues de ninguna ayuda para el mundo rural.

Del lado de la demanda externa, las distorsiones creadas por las subvenciones de exportaciones americanas y europeas desfavorecen a los campesinos peruanos que extraen sus medios de existencia de la agricultura de exportación⁵. El hecho de que el Perú sea importador neto de productos agrícolas no refleja necesariamente sus ventajas comparativas. Sin duda, el acuerdo de la OMC sobre la agricultura, en el marco de las negociaciones comerciales del ciclo de Uruguay, lanzó el proceso de eliminación de las subvenciones sobre los productos agrícolas. Pero el nivel de protección sigue siendo elevado. Así pues, en los países de la OCDE, la tasa media de los derechos de aduana para los productos agrícolas es de 60%, contra una tasa media de 5% para los productos industrializados. La reducción de los derechos de aduana y de subvenciones de los países desarrollados debe permanecer como prioridad en el orden del día de la OMC.

5.2. El empleo alternativo

El modelo presentado en la sección 2 destaca que la educación, la formación y la calificación son factores potenciales en la elección de un empleo que operan de dos maneras. En primer lugar, los trabajadores más cualificados, sea a causa de su formación inicial o sea a causa de su experiencia en un oficio, eligen empleos donde perciben remuneraciones más elevadas que las de los trabajadores no cualificados (efecto-precio). En segundo lugar, los trabajadores menos capacitados no pueden ocupar ciertos empleos disponibles si no disponen de las competencias requeridas (efecto-barrera). La probabilidad de ocupar un empleo cualificado, asalariado o no, se asocia positivamente al capital humano detenido por el trabajador. Hay pues allí un ámbito de intervención pública de primera importancia.

La política educativa forma parte de las actividades más antiguas y más regulares del Estado. A pesar de un contexto económico a veces difícil, el Perú realizó progresos enormes en la cobertura escolar. La gran mayoría de los niños peruanos se inscriben a la escuela primaria y las tasas de escolarización en el nivel secundario (80% de 12-16 años) y el superior (30% de 17-25 años) exceden las tasas de muchos países que tienen un ingreso per cápita cercano (World Bank, 2001). Sin embargo, las disparidades entre las ciudades y el campo perduran. La tasa neta de escolarización en el nivel secundario es de 51% en el medio rural contra 57% en las ciudades, y la del nivel superior se establece a 17% contra un 22% en las zonas urbanas. Además, aunque la igualdad entre los sexos en el acceso a la instrucción sea una de las prioridades del Gobierno peruano, las mujeres permanecen con menos acceso a la educación que los hombres.

De la misma manera, la política de formación profesional es antigua en el Perú. Ella empieza a mediados de los años cincuenta con la Reforma Educativa (1957) que permite la creación de Colegios Secundarios de Especialización Técnica. También se crearon los Centros de Formación Profesional (1956), que se convirtieron en Institutos de Educación Superior en 1982. Los Centros de Educación Ocupacional, creados el mismo año, se destinaron a los estudiantes que no terminaron sus estudios secundarios con éxito. Además varios Institutos de Formación profesional financiados por las empresas aparecieron durante los años setenta⁶. Por otro lado, un gran número de programas específicos destinados

⁵ En 2003, las subvenciones agrícolas de los 30 países más ricos de la OCDE han superado 279 mil millones de dólares, lo que representa un 30% de los ingresos del sector.

⁶ Los más conocidos son el Centro de Formación y Calificación Profesional (CEFOCAP), El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), y el Centro Nacional de Formación al Turismo (CENFOTUR)

a una parte de la población activa (jóvenes, mujeres, profesores, micro empresarios, etc) fueron progresivamente establecidos bajo la responsabilidad de distintos Ministerios⁷. Junto a estas instituciones formales otros numerosos protagonistas intervienen en el campo de la formación profesional: una miríada de escuelas o academias privadas, más de 2000 según estimaciones oficiales del Ministerio de la Educación, ONG y distintas cooperativas y asociaciones. Estos organismos ofrecen formaciones de corta duración en distintos ámbitos como secretariado, las competencias médicas, la estética, la peluquería, la decoración interior, corte y confección, cocina e idiomas.

La cuestión que se plantea en el nuevo contexto económico es la capacidad del Perú para financiar tasas de escolarización cada vez más elevadas en los niveles secundario y superior. El aumento de la oferta en formación supone una enorme disponibilidad de recursos fiscales que la pone en conflicto con la rarefacción de los recursos financieros que pueden afectarla a causa de la prioridad otorgada al reembolso de la deuda. La inversión pública en educación, expresada en porcentajes del PIB, es baja (3%) con relación a los países que obtienen ingresos per cápita parecidos así como con relación a la media de los países de América Latina (4,5%) (World Bank, 2001). Además, la inestabilidad crónica en la asignación de gastos a los sectores públicos se tradujo en fuertes variaciones de los gastos en educación en el transcurso del tiempo. Durante los años ochenta, que fueron años de extrema volatilidad macroeconómica, los gastos en educación cayeron sensiblemente en porcentaje del PIB y en porcentaje de los gastos públicos totales. A partir de 1994, los gastos del Gobierno en favor de la educación aumentaron en un contexto donde los gastos públicos expresados en porcentaje del PIB disminuían. Esta tendencia es un fuerte índice de la voluntad del Gobierno de promover la educación. Demuestra que políticas favorables al empleo son siempre posibles incluso en contextos fiscales difíciles.

En lo que se refiere a la formación profesional, el problema reside sobre todo en la gran dispersión de las instituciones de formación y su desigual calidad. Chacaltana y Sulmont (2004) consideran que actualmente, al lado de una veintena de instituciones que ofrecen la experiencia y la calidad requeridas de los servicios, coexisten millares de entidades que operan en un vacío reglamentario absoluto, sin control de calidad y por lo tanto sin garantizar que los servicios ofrecidos corresponden a las necesidades del mercado laboral. En consecuencia, los beneficios de la formación extra escolar se harán notar por los que tienen acceso a una enseñanza dada por instituciones "formales" así como por los que beneficiaron de una formación empresarial. Además a pesar de los éxitos indiscutibles de algunos programas de formación (pro joven por ejemplo), el número de destinatarios es muy reducido comparado a las necesidades. Por lo tanto, estos programas están lejos de haber adquirido el estatuto de política nacional y permanecen confinados al rango de proyecto piloto. Una de las razones se debe a los pocos medios financieros destinados a estos programas. En 2002, el Estado afectó menos de un 1% de los gastos sociales a las políticas activas de empleo (Chacaltana y Sulmont, 2004).

6. CONCLUSIÓN

El mundo contemporáneo nos muestra hasta qué punto las culturas políticas pueden transformarse sin que las generaciones interesadas tengan la menor conciencia de ese proceso. Este riesgo de ignorancia se empeora cuando se cree, como hoy en día, estar inmunizado mejor que antes contra los fenómenos ideológicos y las derivas que implican. En este aspecto las ciencias sociales asumen una gran responsabilidad: la de poder ayudar a detectar precozmente tales cambios y hacerlos conocer.

Es importante recordar que los países industrializados se desarrollaron gracias a la intervención del Estado porque el aval implícito del Gobierno contribuye a garantizar inversiones que habrían sido más aventuradas y menos prometedoras si se hubieran realizado sin estas garantías. Las prescripciones del

⁷ Se encuentran principalmente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud a través de los Puestos de Salud distribuidos en todo el territorio, y el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH).

neoliberalismo están en contradicción con la historia reciente de la política económica seguida por los países nuevamente industrializados (Sureste asiático) que conocen una prosperidad agrícola e industrial gracias a una fuerte implicación del Estado en la vida económica. Ciertamente, las políticas de estabilización macroeconómica ejecutadas con moderación, pueden verse como una condición previa al crecimiento. No constituyen nunca estrategias de crecimiento. En la mayoría de casos, contribuyeron a reducir la demanda global porque han estado más atentas al reembolso de los acreedores que al mantenimiento de la economía en el pleno empleo.

En el Perú, la persistencia del subempleo en el medio rural se explica principalmente por la ausencia de un plan de desarrollo a largo plazo con mayores inversiones públicas y privadas. Las políticas macroeconómicas de corto plazo, impuestas en el marco de ajustes estructurales, exigieron una retirada del Estado ya poco presente. Estas políticas no llegaron a solucionar los problemas estructurales de la agricultura peruana, a saber, la falta dramática de recursos naturales y financieros. No han sido pues favorables al empleo agrícola. No obstante, la inclinación de la política económica que desfavorece la agricultura no data de la liberalización y de la apertura de la economía. Básicamente, las políticas agrícolas aplicadas en Perú han estado preocupadas por el abastecimiento de las ciudades más que por el desarrollo del empleo y de los ingresos del medio rural (Alvarez, 1983).

Los campesinos peruanos se encuentran en una "trampa de subempleo" de la cual no pueden salir sin ayuda pública. El mecanismo de esta trampa es a la vez simple y dramática: la extrema pobreza de los campesinos produce una tasa de ahorro muy débil que, combinada al elevado riesgo de la actividad, no fomenta la inversión en capital físico o humano. Las inversiones extranjeras no substituyen al ahorro local defectuoso, porque el estado de las infraestructuras y la debilidad del capital humano, los desalentaron. La pobreza genera pues las condiciones propias a su reproducción. Para entrar en el círculo virtuoso donde el crecimiento induce el crecimiento, el mundo rural peruano necesita inversiones públicas masivas concentradas sobre la reducción del riesgo, la mejora de la productividad agrícola, la accesibilidad de los individuos a toda forma de capacitación, la ruptura del aislamiento de las regiones alejadas.

Mejorar la productividad agrícola supone la introducción de nuevas tecnologías. Ahora bien éstas implican casi siempre nuevos riesgos y el fracaso continuo de mecanismos de mercado destinados a la gestión del riesgo en el medio rural sugiere que una de las tareas prioritarias de la política económica sea solucionar este problema. Desde este punto de vista, la inversión en infraestructuras de riego podría constituir una medida clave. La disminución considerable del riesgo productivo que genera el control del agua tiene numerosas implicaciones: favorece el cultivo de nuevos productos más rentables; estimula al empleo de recursos raros como insumos; puede favorecer el acceso al crédito gracias a la estabilidad de los ingresos. A parte de la reducción del riesgo, el control del agua, tiene otras características susceptibles de aumentar la absorción de la mano de obra: aliviar la presión demográfica debido a la escasez natural de tierras útiles; aumento de la intensidad del uso de mano de obra en la unidad agropecuaria; mejora del rendimiento por unidad de superficie que induce a un aumento de la rentabilidad en agricultura.

Sin embargo la agricultura esta lejos de ocupar a los campesinos peruanos a tiempo completo. En consecuencia el empleo en el medio rural no se reduce al empleo agrícola y es necesario aumentar también la capacidad de los individuos para ocupar empleos alternativos. El modelo desarrollado llama la atención sobre tres elementos que deberían suscitar la vigilancia de las autoridades encargadas de la política del empleo. En primer lugar, los niños de las familias rurales necesitan incentivos susceptibles de fomentarles a frecuentar los colegios y las universidades.

El segundo ámbito de la política económica que debería recibir el apoyo del poder público es la promoción de servicios de capacitación profesional que tiene efectos similares a los de la escolaridad sobre el acceso al empleo cualificado. Esta promoción podría organizarse a través del establecimiento de un marco reglamentario que permitiría definir las orientaciones prioritarias, garantizar la adecuación permanente según los requerimientos de las empresas, la oferta de formación, establecer los procedimientos pertinentes de certificación y la calidad de los servicios de formación ofrecidos. Así pues,

cada candidato podría conocer ex ante lo que puede esperar de cada institución y de cada programa de formación profesional.

En tercer lugar, las medidas tradicionales destinadas a aumentar el nivel de educación escolar y extra escolar en el medio rural serán más eficaces si se asocian esfuerzos para mejorar las infraestructuras de comunicación. Las estrategias de promoción del empleo rural deberían pues ser apoyadas por esfuerzos en dirección de la mejora del acceso a las regiones rurales, en particular, por la carretera. La literatura reciente centrada sobre el impacto de la construcción o de la mejora de calidad en carreteras en el medio rural muestra que tiene efectos potenciales sobre la probabilidad de ocupar un empleo. Los beneficios de la formación dependen, en último análisis, de la accesibilidad a empleos que correspondan a los conocimientos y competencias adquiridas. Además, una infraestructura más desarrollada influye también sobre la fluidez de los mercados de bienes y factores, la ubicación de las empresas en el medio rural, la productividad agrícola, y...la asiduidad de los niños a la escuela (Jacoby, 1998; Estache, 2004). Dado el número limitado de instrumentos de política económica capaces de llegar a los pobres, el desarrollo de las infraestructuras de comunicación parece un objetivo deseable no sólo desde el punto de vista de la eficacia económica sino también de la equidad.

REFERENCIAS

- Alvarez, E., 1983, *Política económica allí agricultura en EL Perú 1969-1979*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 343 p.
- Caballero, J.Sr., 1981, *Economía Agraria de la Sierra Peruana*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 426 p.
- Chacaltana, J., y Sulmont, D., 2004, *Políticas activó en EL mercado laboral peruano: EL potencial del capacitación allí loa servicios de empleo*, en Políticas de Empleo en Peru, tomo I, CIES, Lima, 404 p.
- Elbers, C., y Lanjouw, P., 2001, "Intersectoral Transfer, Growth, and Inequality in Rural Ecuador", *World Development*, 29 (3): 481-496.
- Ferreira, F.,H., y Lanjouw, P., 2001, "rural Nonfarm Activities and Poverty in the Brazilian Northeast", *World Development*, 29 (3): 509-528.
- Figueroa, A., 1980, *El economía campesina de la Sierra del Perú*, fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Peru, Lima, 146 p.
- Golte, J., 1980, *La racionalidad de la organización andina*, IEP, Lima, 124 p.
- Gonzales de Olarte, E., 1982, *Economías regionales del Perú*, IEP, Lima, 288 p.
- Gonzales de Olarte, E., 1994, *En las fronteras del mercado. Economía política del campesinado en el Perú*, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 371 p.
- Gonzales de Olarte, E., 1996, *EL ajusta estructural allí loa campesinos*, IEP, Lima, 138 p.
- INEI, 1994, III Censo Nacional Agropecuario, Lima, Pérou.
- INEI, 2001, Perú: Compendio Estadístico 2001, Lima, Perú, 784 p.
- INEI, 2002, *Condiciones de vació en loa departamentos del Perú 2001*, Lima, 329 p.
- Lanjouw, P., 1999, "Rural" Nonagricultural Employment and Poverty en Ecuador "," *Economic Development and Cultural Cambio*, 48 (1): .
- Mazurek, H & alli, 1998, *Perú en Mapas - Estructura y Dinámicas del Espacio Agropecuario - III Censo Nacional Agropecuario 1994*, ORSTOM-INEI, 218 p.

Phélinas, P., 2003 "el papel de la diversificación en" el desarrollo económico: la imposible medida ", *Economía y Sociedad*," Serie F, "Desarrollo" - V, 41 (7-8): 1373-1403.

Phélinas, P.Sr., 2004, El empleo complementario en medio rural peruano: ¿la riqueza de los pobres? *Economía Rural*, 282: 40-58.

Ranis, G. Y Stewart, F., 1993, "Rural Nonagricultural" Activities in Development: Theory and Aplicación ", " *Diario of Development Economics*, 40: 75-101.

Reardon, T., Berdegué, J., and Ecobar, G., 2001, "Rural Nonfarm Employment and Incomes en Latín América:" Overview and Policy Implicaciones ", *World Development*, 29 (3):" 395-409.

Ruben, R., y Van den Berg, M., "Nonfarm Employment and Poverty Alleviation of Rural Farm Households in Honduras", *World Development*, 29 (3): 549-560.

Trivelli, C., 1997, Crédito en loa hogares rurales del Perú, Investigaciones breves nº4, CIES, Lima, 73 p.

Trivelli, C., & alli, 2004, *Mercado allí gestión del micro crédito en el Perú*, IEP, Lima, 641 p.